



REFERENCIA: 08758-41-89-001-2023-00249-00.

PROCESO: VERBAL – RESTITUCIÓN BIEN INMUEBLE POR OCUPACIÓN DE HECHO

DEMANDANTE: OSCAR ALTAHONA RUA

DEMANDADO: BEATRIZ ALMANZA ALMANZA Y OTRO.

Informe Secretarial: Señor Juez a su Despacho el presente proceso verbal de la referencia, pendiente de resolver recurso de reposición interpuesto por el apoderado judicial de la demandada **BEATRIZ ALMANZA ALMANZA**, en contra del auto adiado 24 de mayo de 2023, teniendo en cuenta que ya se surtió el traslado a la parte demandante. Sírvase proveer.

Soledad, febrero 28 de 2024.

EMIR ACUÑA POLOCHE
EL SECRETARIO

JUZGADO PRIMERO DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE DE SOLEDAD, FEBRERO 28 DE 2024.

1. ASUNTO POR RESOLVER

Visto el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver el recurso de reposición, interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada **BEATRIZ ALMANZA ALMANZA**, en contra del auto de fecha 24 de mayo de 2023, mediante el cual, este Juzgado admitió la presente demanda verbal de restitución de bien inmueble por ocupación de hecho.

2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN:

La parte demandada arguyó su recurso, manifestando que el demandante no cumplió con lo ordenado por los artículos 6 y 8 de la Ley 2213 de 2022, en la medida que omitió el deber de enviar previamente la demanda junto con sus anexos y la prueba de la misma, debiendo acreditar si se envió por correo electrónico o por correo certificado, tal y como lo exige la norma.

De igual manera, alegó la falta de jurisdicción y competencia de este Despacho Judicial, ya que el asunto recae sobre un predio urbano, y no rural, como lo señala el artículo 380 del Código General del Proceso, en su inciso 8°. Que por lo anterior, la autoridad competente sería la Alcaldía Municipal-Inspección General o la autoridad que corresponda en virtud de la ley.

3. ACTUACIÓN PROCESAL.

A pesar de haberse corrido traslado del recurso de reposición, interpuesto por el apoderado judicial de la demandada, la parte demandante no se pronunció al respecto.



4. CONSIDERACIONES:

Sea lo primero indicar, que el artículo 318 del Código General del Proceso establece que el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez salvo norma en contrario, de igual manera que cuando el auto a recurrir se pronuncie por fuera de audiencia el recurso debe interponerse dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto a impugnar.

En el asunto que nos ocupa, el recurrente solicita que se revoque la providencia adiada 24 de mayo de 2023, mediante la cual se admitió el proceso de la referencia, arguyendo dos razones. La primera, refiriendo que la parte demandante omitió su deber de enviar previo a su presentación, la demanda junto con sus anexos al correo electrónico o dirección física del demandado. Y la segunda razón, arguyó la falta de competencia y jurisdicción, al ser un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en predio urbano, la autoridad competente sería la Alcaldía Municipal-Inspección de Policía de Soledad.

Para decidir el primer reproche del recurrente, es importante tener en cuenta que el inciso quinto del artículo 6 de la ley 2213 de 2022, establece en su tenor que *"En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos"*. (Subrayado fuera de texto).

El anterior inciso fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-522 de 2023, en el entendido que las reglas procesales sobre admisibilidad a las que refiere, no son aplicables únicamente a la acción de tutela, es decir, para los demás asuntos, el deber impuesto al demandante, es totalmente exigible.

Sin embargo, también vale la pena recordar que la sentencia C-420 del 2020, por medio de la cual se discutió la constitucionalidad del Decreto 806 de 2020, la Corte señaló que en lo correspondiente al inciso 4º del artículo del mencionado decreto (el cual sirvió de guía para los dispuesto posteriormente en el artículo 6º de la Ley 2213 de 2022), las reglas ahí impuestas perseguían los fines constitucionales importantes como son la celeridad y economía procesal.



Por lo anterior, y si bien puede observarse que las razones del recurrente están fundadas y son totalmente válidas, puesto que, al observarse los anexos, no obra prueba alguna que demostrase que la parte demandante hubiese corrido traslado de la demanda junto con la presentación de la misma, a los demandados bien sea por mensaje de datos, o a la dirección física de los mismos. Sin embargo, retrotraer los efectos de la admisión de la demanda, tal y como lo sugiere el recurrente, atentaría contra los mismos principios que la Corte Constitucional buscó proteger al declarar la exigibilidad del artículo en mención, más aún cuando la parte demandada ya está notificada de la misma, y en su oportunidad, presentó el recurso objeto de decisión.

Así las cosas, el primer argumento que, a pesar de tener razones de prosperidad, no será tenido en cuenta en aras de garantizar los principios constitucionales de celeridad y economía procesal, contemplados en el artículo 29 de la Constitución Nacional.

En cuanto al segundo argumento expuesto por el recurrente, en cuanto señala que este Juzgado carece de competencia y jurisdicción para conocer el presente asunto, ya que el mismo debe adelantarse es ante la Inspección de Policía y Alcaldía Municipal.

De lo anterior, tenemos que el artículo 78 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-Ley 1801 de 2016-, establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 78. COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LA POSESIÓN Y MERA TENENCIA DE BIENES INMUEBLES. *Son aquellos contrarios a la posesión, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes fiscales, bienes de uso público, bienes de utilidad pública o social, bienes destinados a prestación de servicios públicos. Estos son los siguientes:*

1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesión o mera tenencia de un bien inmueble ocupándolo ilegalmente.

2. Perturbar la posesión o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de daños materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averías o daños en el propio inmueble que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.

PARÁGRAFO. *Quien incurra en uno o más de los comportamientos señalados, será objeto de la aplicación de las siguientes medidas:*

COMPORTAMIENTOS

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR

Numeral 1	Restablecimiento del derecho de servidumbre y reparación de daños materiales;
Numeral 2	Multa General tipo 2.”

A su vez, el artículo 79 ibídem, dispone:

“ARTÍCULO 79. EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES. *Para el ejercicio de la acción de Policía en el caso de la*



perturbación de los derechos de que trata este título, las siguientes personas, podrán instaurar querrela ante el inspector de Policía, mediante el procedimiento único estipulado en este Código:

1. El titular de la posesión o la mera tenencia de los inmuebles particulares o de las servidumbres.

2. Las entidades de derecho público.

3. Los apoderados o representantes legales de los antes mencionados.

(....)".

"ARTÍCULO 80. CARÁCTER, EFECTO Y CADUCIDAD DEL AMPARO A LA POSESIÓN, MERA TENENCIA Y SERVIDUMBRE. *El amparo de la posesión, la mera tenencia y las servidumbres, es una medida de carácter precario y provisional, de efecto inmediato, cuya única finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, si a ellas hubiere lugar.*

PARÁGRAFO. *La acción policial de protección a la posesión, la mera tenencia y servidumbres de los inmuebles de los particulares, caducará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la perturbación por ocupación ilegal. (...)"*

En ese orden de ideas, le asiste la razón al recurrente y se advierte que este Despacho Judicial no es competente para dirimir el conflicto aquí planteado, puesto que tal como se evidencia en los hechos planteados en la demanda y la norma en comento, son del consorte de los trámites previstos para el ejercicio de la acción de Policía, al ser un predio urbano y no rural.

Si bien es cierto el amparo a la posesión o tenencia es una medida de carácter precaria y provisional que se dicta en trámites policivos y la norma indica que la finalidad, es mantener el statu quo mientras el juez ordinario competente decide definitivamente sobre la titularidad de los derechos reales en controversia y las indemnizaciones correspondientes, a la justicia ordinaria se acude cuando el poseedor en este caso, tiene una vocación de prescribir el inmueble y ostenta el animus y corpus, bajo los parámetros de aplicación del artículo 375 del CGP, o para defender su posesión tiene a su favor una sentencia que ordene cesar la perturbación o prohíba la ejecución de una obra o de un hecho conforme lo señalado en el artículo 377 del CGP, lo que no se observa dentro del estudio de la presente demanda, no ajustándose lo normado al caso, ni adecuado las pretensiones a una prescripción adquisitiva de dominio por lo tanto, este Despacho en aras de evitar una nulidad que vicie a futuro el proceso, repondrá el auto de fecha 24 de mayo de 2023, y en su defecto, rechazará la presente demanda por falta de competencia para conocer del presente proceso.

En razón de lo expuesto, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO: REPONER el auto de fecha 24 de mayo de 2023, por medio del cual se admitió la demanda de la referencia.



SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y en ejercicio del control de legalidad, **RECHAZAR** por falta de competencia el presente proceso verbal sumario de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: Una vez en firme la anterior decisión, **ordénese** el archivo del presente proceso.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

CESAR ENRIQUE PEÑALOZA GÓMEZ

EL JUEZ

Firmado Por:

Cesar Enrique Peñaloza Gomez

Juez

Juzgado Pequeñas Causas

Juzgado 01 Pequeñas Causas Y Competencia Múltiple

Soledad - Atlántico

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **9b6ca33970dcfeac8c8e7ff684ca73b4acb754e1e68a18de98ff4702ce9dc474**

Documento generado en 28/02/2024 01:31:25 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>